

diente notificación al expresado C. Administrador de la Renta del papel sellado de Veracruz, por medio del despacho respectivo al Juzgado de Distrito de esa ciudad; librese en seguida, al propio Juzgado, la ejecutoria de estilo, remitiéndose copia certificada de esta resolución al Ministerio de Hacienda; elevándose en seguida los autos para su revisión, á la 1.^a Sala de la Corte Suprema de Justicia.

El C. Lic. Miguel Sandoval, Magistrado de este Tribunal Superior de Circuito, así lo mandó y firmó. Doy fé.—*Miguel Sandoval.*—*Felipe de J. Almazan.*

Es copia de su original para su inserción en el "Semanario Judicial."—*Felipe de J. Almazan*, secretario.

Pedimento del C. Procurador general de la Nación.

El Procurador general interino dice: que en el Juzgado de 1.^a instancia del Canton de Ozulama, se inició en 22 de Abril de 1869, la presente causa contra el C. Febronio Guzman ex-Administrador subalterno de la renta del papel sellado en el Canton de Tantoyuca, y su socio Francisco de P. Zurita, por peculado.

Después de practicadas las primeras diligencias del sumario, se remitió en 9 de Octubre del mismo año al Juzgado de Distrito de Veracruz, quien la continuó solamente contra Francisco de P. Zurita, á causa del fallecimiento del C. Febronio Guzman, pronunciando sentencia definitiva en 4 de Octubre del año próximo pasado, en la que dá por compungado al reo con el tiempo de prisión sufrida, quedando obligado á pagar al C. Administrador de la renta del papel sellado del Estado, la cantidad que se le liquidó por dicho Administrador, siendo este responsable de dicha cantidad al Erario federal por haber nombrado sin fianza al subalterno D. Febronio Guzman, absolviendo al procesado del cargo que le resul-

ta, por no haber remitido el sobrante del papel sellado del bienio de 1866 y 1867, á la principal del ramo, y mandando ponerlo en libertad bajo de fianza, cuya determinación, por sus propios legales fundamentos, fué confirmada por el Tribunal de Circuito de Puebla, en 16 de Marzo del corriente año, causando así ejecutoria conforme al artículo 34 de la ley de 14 de Febrero de 1826; y como el suscrito no encuentra méritos para exigir la responsabilidad á los jueces que intervinieron en este proceso, cuyo procedimiento se ha seguido con arreglo á derecho, pide se dé por revisado.

México, 25 de Setiembre de 1874.—*Velasquez.*

Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.

México, 11 de Octubre de 1874.—Por revisado y no apareciendo mérito para la responsabilidad, devuélvase las actuaciones y archívese á su vez el Toca.—*Miguel Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*Ignacio María Altamirano.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Octubre 24 de 1874.—*Enrique Landa.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Chihuahua por los CC. José Armendariz y Leopoldo Caso Lopez, contra el C. Alcalde 1.^o del Distrito Iturbide, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Los CC. José Armendariz y Leopoldo Caso Lopez, han ocurrido á ese Juzgado

solicitando amparo contra la orden del C. Juez 1º de ésta Ciudad, que los manda reducir á prision por un robo que se les atribuye, pidiendo al mismo tiempo se mande suspender previamente la referida orden de prision hasta en tanto se sustancié y resuelva el juicio principal sobre amparo. El C. Juez de Distrito tuvo á bien acordarlo así fundándose en la ley de 20 de Enero de 1869, por la urgencia notoria del caso. Ejecutoriado este auto del Juzgado, pedido informe al Alcalde 1º de esta Ciudad en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 9º de la mencionado ley, se ha pasado el expediente al que suscribe para que pida sobre lo principal del negocio.

Los quejosos fundan su peticion en los arts. 16 y 20 de la Constitucion federal, por considerar violadas en sus personas las garantías individuales en ellos consignadas.

El art. 1º de la ley de amparos, en su fraccion 1ª establece, que los Tribunales federales resuelvan toda controversia que se suscite por leyes ó actos de cualquiera autoridad que viole las garantías individuales; y siendo este el caso señalado por los quejosos y en que fundan su peticion, debe por lo mismo investigarse si la orden del Alcalde 1º de esta Ciudad en que se les manda reducir á prision, ha violado en efecto las garantías que otorgan los arts. 16 y 20 de la Constitucion.

El primero de estos artículos pone como condiciones para que algun individuo pueda ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, el que esto se haga en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento; agregando en su parte final, que en caso de delito infraganti, toda persona puede aprehender al delincuente y á sus cómplices, poniéndolos sin demora á disposicion de la autoridad inmediata. Como se vé, la prohibicion que entraña este artículo no es absoluta.

Pues bien C. Juez, en la orden de detencion librada por el Alcalde 1º de ésta Ciu-

dad, se han llenado estas condiciones requeridas por dicho art. 16. Ha sido librada por Juez competente en legal ejercicio de su jurisdiccion; en ella se consiguió por escrito el motivo ó causa legal del procedimiento, que no es otro que el estar acusados los quejosos de un robo, delito que aun de oficio debe perseguirse, aun cuando no hubiera acusador; y si la parte final del referido artículo, faculta á todo ciudadano en caso de delito infraganti para aprehender al delincuente y sus cómplices, poniéndolos inmediatamente á disposicion de la autoridad inmediata, ¿no tendrá esta misma facultad el Juez competente, tratándose de un delito público como el robo que á los quejosos se atribuye? Indudablemente que sí la tiene, no solo para esta detencion previa ó provisional, sino hasta para proceder en contra del acusado en los términos que demarca la ley de procedimientos judiciales en el Estado.

Esta, en su art. 622 frac. 1ª dice terminantemente: que habiendo un dato cualquiera de que se ha cometido un delito y de que alguna persona tiene participio en el hecho como actor, cómplice ó encubridor, se le mandará poner detenido ó incomunicado, por orden escrita de cualquiera autoridad.

Esto es lo que se ha hecho con los quejosos; el Alcalde de esta Ciudad C. José M. Escobar, por los datos suministrados por el acusador, dictó la orden de detencion de los acusados, expresando en ella el motivo del procedimiento, orden que no puede infamar como el auto de formal prision, puesto que se decretó interinaria y provisionalmente, para evitar la fuga y confabulacion, hasta en tanto se vé si hay mérito suficiente para decretar en el término demarcado en el art. 19 de la misma Constitucion federal y 21 de la del Estado, el auto motivado contra el detenido.

Las fracciones 2ª hasta la 7ª del mismo art. 644, facultan no solo á los Alcaldes, sino á los ministros de policía rural, para practicar las primeras diligencias en una sumaria, remitiéndolas despues al Juez de 1º

instancia respectivo, con el auto formal de prision, cuando halla lugar á él; de modo, que es incuestionable la facultad que como Juez competente ha tenido el C. Escobar para proceder contra los quejosos.

Las garantías que otorga al acusado en un juicio criminal el art. 20 de la Constitucion federal, indudablemente deben observarse durante el curso del juicio y no precisamente antes de la detencion; ésta, como que tiene el carácter de preventiva, debe ser anterior á la declaracion preparatoria que debe recibirse dentro de cuarenta y ocho horas, decretándose dentro de tercero dia el auto motivado, cuando haya méritos suficientes en que fundarlo, y sucesivamente será el careo de testigos, nombramiento de defensor etc; todo lo cual no podria ser antes de la detencion preventiva del acusado, y en el caso presente que nos ocupa, los Sres. Armendariz y Caso Lopez, han sabido el nombre de su acusador, segun se colige de su mismo escrito en que solicitan amparo, así como el motivo ó causa de que se proceda en su contra.

Agregan los quejosos, que habiendo presentado un escrito al relacionado Alcalde 1º, este no les ha hecho saber el resultado, violándose con esto la garantía consignada en el artículo 8º de la Constitucion. En el informe verbal vertido por el Sr. Escobar, aparece: que sí se hizo saber el acuerdo ó resolucion recaída; pero aun cuando esto no fuera así, dependería tal vez de que los mismos interesados no ocurrirían oportunamente á saber el resultado.

Verdad es que el artículo 8º de la ley de amparo, establece: que no es admisible este recurso en los negocios judiciales; pero se ha visto á observado hasta el día, una práctica uniforme en contrario, debido tal vez, á que si bien es cierto que en los negocios judiciales hay otros recursos que señalan las leyes, como el de apelacion, súplica etc.; tampoco es menos cierto que aun en estos negocios puede haber infracciones tan flagrantes de la Constitucion y garantías

individuales, que sea preciso ocurrir al amparo de la Justicia federal, como medio mas seguro y expeditivo; pero lo que no es exacto, es que los jueces de Distrito al sustanciar estos juicios se ingieran en las atribuciones de los jueces ordinarios. La ley ha demarcado perfectamente bien, las facultades de unos y otros jueces, limitándose los de la Federacion, en esta clase de juicios, á declarar si la Justicia de la Union ampara ó no en el caso especial que se presenta.

De todo lo expuesto se colige rectamente, que no ha habido violacion de ninguna de las garantías individuales en que se apoyan los quejosos, al solicitar amparo de la Justicia federal; y como la violacion sea precisamente el fundamento en que debe descansar la concesion de este recurso, faltando dicho fundamento, como en efecto falta en el caso especial que nos ocupa, debe, de conformidad con la misma ley de 20 de Enero de 1869, y artículo 101 de la Constitucion federal, declararse que el recurso no procede, y que en su virtud la Justicia de la Union no ampara ni protege á los Sres. José Armendariz y Leopoldo Caso Lopez, contra la Orden por escrito del Alcalde 1º de esta Ciudad, en que se dispone sean detenidos en la carcel, por estar acusados de un delito de robo, declarándose al mismo tiempo, que por equidad y en atencion á sus escasos recursos, no se les impone la pena ó multa que establece la misma ley de amparo.

Así pide el C. Promotor que suscribe, se sirva V. declararlo, disponiendo la publicacion del presente dictámen y sentencia que recaiga, en el "Semanario Judicial de la Federacion."

Chihuahua, 21 de Julio de 1874.

Es copia.—J. de D. Burgos.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Chihuahua, Julio 30 de 1874.—Visto este juicio de amparo promovido por los C. C. José Armendariz y Leopoldo Caso López, contra el C. Alcalde 1º de esta Ciudad, por considerar violadas en sus personas las garantías que conceden los artículos 8º, 16 y 20 de la Carta fundamental de 1857, con las órdenes de detención que la referida autoridad libró en 9 y 15 del mes que está finalizando. Constando de autos que los espresados Armendariz y Caso López, presentaron escrito el día 15 ante este Juzgado, diciendo: que por el periódico titulado «Juan Panadero» que se publica en esta Ciudad, llegó á su noticia que el C. Cristóbal Domínguez les atribuye el ser autores de un delito de estafa ó hurto, del que estaba dispuesto á denunciarlos: que por exigirlo su buena reputación y en uso de sus derechos ocurrieron ante el C. Alcalde 1º de este Canton entablando el juicio de jactancia; que algunos días después supieron que Domínguez los había acusado ante el C. Jefe Político de este Distrito Iturbide y cuya autoridad los consignó al mismo Alcalde 1º, C. José Mº Escobar, y que, citado Domínguez, ratificó su queja y se constituyó acusador; que el Juez dictó la orden de prisión que acompañaron marcada con el número 1 y fueron reducidos á prisión en la cárcel pública; pero que debido á las agencias de su patrono el C. Lic. Luis Bárcenas, fueron puestos en libertad; que presentaron escrito al mismo Alcalde pidiendo que se exigiese fianza de calumnia á su acusador Domínguez; que entre tanto se suspendiese todo procedimiento contra sus personas, y que á este ocurso, con infracción del artículo 8º de la Constitución, no recayó proveído alguno; ó que si se decretó no se les hizo saber la providencia, sino antes bien, en los momentos en que formulaban su queja se les presentó la orden de prisión que acompañan marcada con el número 2, insistiendo el policía C. Felipe Alvarez en llevarlos á la cárcel. Es-

presan que con estas órdenes se violan en sus personas las garantías que otorgan los espresados arts. 8º, 16 y 20 de la Constitución, y concluyen pidiendo que desde luego se suspendan las órdenes y se les ampare y proteja contra los procedimientos del Alcalde 1º de esta Ciudad:

Visto el informe del referido Alcalde 1º en que manifiesta que suspenderá por ahora la ejecución del acto reclamado, sin que por ello se entienda que considera justificada la intervención del Juzgado de Distrito en un juicio criminal: que el amparo no procede en los negocios judiciales: que no violó en las personas de los quejosos las garantías que conceden los arts. 8º, 16 y 20 de la Constitución; en cuanto al primero, porque proveyó los escritos de los interesados Armendariz y Caso López y les hizo saber las providencias que á aquellos recayeron; en cuanto al segundo, por que el artículo constitucional se refiere á los negocios civiles, y no á los criminales, y porque sus procedimientos se sujetan á la ley de administración de justicia del Estado de 16 de Diciembre de 1869; y en cuanto al tercero, porque no habiéndose verificado aun la detención, no era llegado el caso en que los quejosos pudieran disfrutarlas, ni la autoridad violarlas.

Visto el pedimento fiscal, en que el Ministerio público, después de exponer las razones que estimó convenientes, concluye pidiendo se declare que el recurso no procede y en su virtud que no se ampare ni proteja á los espresados Armendariz y Caso López, y

Considerando: Que el C. José Mº Escobar ejerce legalmente las funciones de Alcalde 1º de este Canton, y que conforme á la ley de administración de justicia ya citada, es competente para conocer en los juicios verbales civiles y criminales y practicar las primeras diligencias en los de la naturaleza de los últimos, que deban seguirse por escrito.

Considerando: Que los quejosos Armen-

dariz y Caso López, lejos de negar la legalidad y competencia del Alcalde 1º, ocurrieron ante él entablando el juicio de jactancia, contra su acusador Dominguez; y además, pretendiendo que á éste se la mandase afianzar de calumnia.

Considerando: Que, segun confiesan los muy repetidos Armendariz y Caso Lopez, Dominguez los acusó ante el C. Gefe Político de este Distrito; dicha autoridad los consignó al Alcalde 1º, quien no expidió las órdenes de detencion, sino despues de haber citado á Dominguez, ratificándose este y constituyéndose acusador.

Considerando: Que segun el informe del Alcalde 1º, cumplió con las prescripciones del art. 8º de la Constitucion, proveyendo los escritos de los peticionarios y haciéndoles saber el resultado de su solicitud.

Considerando, en cuanto al art. 16 de la misma Suprema ley; que segun el mismo informe de la autoridad ejecutora del acto reclamado y confesion de los quejosos, hubo mandamiento escrito de autoridad competente, que fundó y motivó la causa del procedimiento.

Considerando, en cuanto al art. 20 de la repetida Suprema ley; que no pudieron violarse las garantías en él concedidas, por no haberse verificado la prision. Por tales consideraciones, y con fundamento de los artículos citados y 101 y 102 de la misma Carta fundamental, y de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara:

Que la Justicia de la Union, no ampara ni protege á los CC. José Armendariz y Leopoldo Caso López, contra las órdenes del Alcalde 1º de esta Ciudad, C. José Mº Escobar.

Sáquense las copias correspondientes de esta sentencia para su publicacion, mandándose al periódico oficial del Gobierno del Estado, y al "Semanario Judicial."

Remítanse los autos á la Suprema Corte de Justicia para los efectos legales, despues de notificada la misma sentencia á quien corresponda. El C. Juez definitivamente juz-

gando por este auto, así lo decretó, mandó y firmó por ante mí. Doy fé.—*J. Hierro.*
—*A. E. Perez.*

Es copia. Chihuahua, Julio 31 de 1874.
—*José Hierro.*—*Abraham Eriberto Perez,*
secretario.

Sentencia del Tribunal de Circuito.

México, Octubre 14 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Chihuahua, por D. José Armendariz y D. Leopoldo Caso López, contra el Alcalde 1º de esa Ciudad, que los mandó aprehender con violacion de las garantías á que se refieren los arts. 8º, 16 y 20 de la Constitucion general, que invocan los quejosos; y

Considerando: Que segun las constancias del expediente, aparece que el Alcalde 1º de Chihuahua proveyó al escrito en que los interesados pidieron que el C. Cristóbal Dominguez afianzara de calumnia, y se les notificó; de lo que resultó que no se ha vulnerado el art. 8º constitucional, en la parte que dispone que á toda peticion debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad á quien se dirija, y que esta debe hacerlo saber al peticionario: que así mismo en el mandamiento de aprehension expedido por el Alcalde 1º de Chihuahua, y presentado por los quejosos, se expresa el motivo por lo que se manda esa aprehension: que no estando estos aprehendidos, ni habiéndoselos formado causa hasta hoy, no ha sido necesario dictar ni motivar el auto de formal prision; y que por lo mismo no se han vulnerado las garantías á que se refiere el art. 16 de la Constitucion general.

Por lo expuesto, y de conformidad con lo que previene el art. 101 de la misma Constitucion, se decreta: Que se confirma la sentencia pronunciada respecto de este juicio, á 30 de Julio último, por el Juez de Distrito de Chihuahua, que declara que la justicia de la Union no ampara ni protege á los

CC. José Armendariz y Leopoldo Caso López, contra las Órdenes del Alcalde 1º de esa Ciudad, C. José Mº Escobar.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia, para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así, por unanimidad de votos, lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Mº Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Noviembre 4 de 1874.—*Enrique Landa.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Coahuila por el C. Octaviano Cervera, contra el C. Presidente municipal de la Villa de Fuentes, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez.

El Promotor fiscal dice: que el C. Octaviano Cervera, ha solicitado el amparo de la Justicia de la Union, contra la providencia que el Presidente municipal de la Villa de Fuente, dictó para llevar á efecto la division de terrenos comunales, hecha por los accionistas ó partícipes, en cumplimiento del artículo 1º de la ley del Estado de fecha 6 de Enero de 71, con el fin de reunir los ganados en los terrenos mas apropiados, para evitar los daños que causan en los sembrados y plantíos.

Entre los documentos presentados por el

TOMO VI.—PARTE II.

solicitante, obra (á fojas 2) la acta que conforme á la ley citada, debe levantarse y en la que consta, que el dia señalado en el artículo 1º mencionado, la mayoría de los comuneros ó accionistas, hizo la expresada designacion, y que en cumplimiento del artículo 2º de la misma ley se fijó el término de quince dias á los dueños de ganados para que los trasladasen á los terrenos comunales, que por mayoría de votos se reconocieren mas á propósito para reunir los semovientes y evitar los daños y pérdidas de los sembrados.

El expresado Presidente municipal, cumpliendo con el deber que le impone la mayoría, de ejecutar el acuerdo de la mayoría de accionistas, previno á todos los dueños de ganados, que en el término referido de quince dias, que designa el artículo 2º citado, los trasladasen á los terrenos mencionados.

Con esta providencia el quejoso afirma, que se ha violado en su persona, la garantía consignada en el artículo 16 de la Constitucion federal, en virtud del *que, nadie puede ser molestado en sus posesiones sin mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.*

De la simple narracion de los hechos, se advierte que no existe la violacion de que se queja el C. Cervera. No ha sido vulnerada su propiedad ni su posesion, porque ni posee como dueño los terrenos de la comunidad, sino en representacion de esta, ni tiene otro derecho que el simple uso de ellos, sujetándose á los acuerdos que dicte la mayoría de los accionistas acerca del modo mas conveniente en que deben usarse aquellos terrenos, para atender al interés de la comunidad, y para evitar los daños y perjuicios de los sembrados.

Los requisitos establecidos en aquel artículo constitucional, han sido observados fielmente, en la providencia contra la que se pide el amparo. Ha mediado el mandamiento escrito de la autoridad competen-